

CAPITULO IV

LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA: LECCIONES APRENDIDAS EN EL PARAGUAY

Ramón Fogel

1. EL ALCANCE DE LAS LECCIONES APRENDIDAS

El aprendizaje proviene más de los errores que de los aciertos en cuatro casos de intervención socioambiental, sistematizados por Carlos Mora, Luis Ortiz y el autor de estas notas; el impacto a nivel nacional de las macro variables es analizado por Miguel Enciso en su trabajo acerca de procesos socio-económicos en el Paraguay. Al destilar las lecciones aprendidas de los resultados obtenidos utilizamos un análisis comparativo de



casos con rasgos estructurales típicos. Tres de ellas corresponden a intervenciones con grupos locales campesinos y uno de ellos con grupos indígenas; ninguna de las experiencias es insólita en el sentido que se desarrollaron en colectividades que reflejan la situación del Paraguay rural. En la sistematización de los casos seguimos pautas planteadas en las formulaciones acerca de los aspectos teórico-metodológicos de la investigación acción presentado en el primer capítulo.

La delimitación de las unidades de análisis utilizadas, lleva a la discusión acerca del espacio social de la Investigación Acción Participativa (IAP). En este sentido, debe tenerse en cuenta que toda intervención socioambiental se orienta al sujeto -que resiste la degradación en cualesquiera de sus formas y se propone revertirlas-; el escenario en que mejor se expresa lo subjetivo y lo intersubjetivo es el de los pequeños espacios sociales (el barrio, la compañía, el comité de productores, el sindicato, etc.). En el caso del tekoha Jukeri de los Mbyá queda muy claro que lo que suele llamarse comunidad es el espacio social del sujeto que sufre los efectos dañinos de la globalización y los resiste, a pesar de la descomposición que sufre.



El ámbito local tiene diversas connotaciones en la literatura y en el repaso de las lecciones aprendidas; el mismo va desde el vecindario o asociación voluntaria de barrio, hasta la comuna o municipio. En estas formulaciones el término local apunta básicamente a localidades como punto de partida de la acción ambiental.

Es en este espacio que se puede desarrollar una IAP, que supone diálogo sobre la degradación y sus causas, y sobre lo que puede hacerse para revertirla; lo micro sin embargo no alcanza, ya que en la degradación intervienen poderosas fuerzas externas, lo que plantea las complejas relaciones entre lo micro y lo macro. En una primera fase esos niveles o escalas de la participación comprenden la organización con base territorial local, la junta vecinal que reúne a todos los vecinos de una localidad, y el Consejo Distrital, a nivel de gobierno distrital.

Esto lleva a que las formas de participación, debe articularse hacia arriba y aún queda abierto como camino a recorrer en futuras intervenciones; ciertamente mientras no se llegue a niveles en que se toman decisiones relevantes para la gente la degradación no podrá ser encarada en serio. Esta articulación se ha dado a nivel de los Centros de Acción Ambiental en el caso del Proyecto Hidrovía, que explotó la capacidad de lobby de extensas y densas redes y evitó la concreción de un proyecto que hubiera tenido consecuencias desastrosas. En este caso, el peligro sigue latente pero en una escala más reducida que la planteada inicialmente.

2. EL CONTEXTO NACIONAL Y LAS MACROVARIABLES

El rasgo estructural básico del Paraguay está definido por la importancia de la producción agrícola; este hecho marca su sociedad y su economía, y lo diferencia de otros países de la región; mientras en América Latina la participación de la agricultura en el PIB en la década del 80 fue apenas superior al 10%, en el Paraguay esa participación osciló entre el 26 y el 28%; la producción industrial que nunca fue importante cayó en su contribución al PIB en las últimas dos décadas (Enciso, 1998).

El estilo de desarrollo del país se caracteriza por su dualidad en el sentido que crecieron grandes empresas agropecuarias y se empobrecieron las unidades campesinas. Resulta llamativo el contraste entre, por una parte, el aumento de la producción de trigo y soja -producidas por empresas modernas que apenas generan empleo- en lo que va de esta década, y por otra, la pronunciada caída del algodón cultivado en las explotaciones

campesinas, así como los cultivos destinados al mercado interno (mandioca, maní, poroto); la descomposición de la agricultura campesina tradicional toma diversas formas, siendo notable el crecimiento de la indigencia y la emigración a las ciudades, las mujeres para insertarse en el empleo doméstico y los hombres en el comercio ambulante.

Las modernas empresas concentraron recursos productivos, incluyendo la tierra, que constituye el principal activo en un país basado en la producción agropecuaria; de hecho el 90% de sus exportaciones provienen de cuatro productos agropecuarios. La heterogeneidad de la economía paraguaya se acentuó en los últimos años y se proyectó en modificaciones en los agrupamientos sociales y en las relaciones entre éstos; lo más visible en los cambios en la estratificación social es la brecha entre los excluidos por el modelo económico y marginados socialmente, y los que participan en las relaciones de producción predominantes, y en los servicios sociales y el ingreso. Parte importante de los excluidos están en el comercio callejero y en el empleo doméstico.

En el otro extremo ha crecido un conglomerado de empresas cuya acumulación originaria esta ligada a la construcción de la gigantesca represa de Itaipú; este grupo económico que busca la máxima apertura al comercio exterior donde coloca parte de su producción, busca conservar su fuerte influencia en las diversas esferas del Estado, en una suerte de privatización de la esfera pública. En la ponderación de las consecuencias de la intervención de estos nuevos actores debe tenerse presente que el poder económico concentrado originadas más en actividades ligadas a la corrupción que a actividades productivas lícitas manejan hoy medios de comunicación orales, escritos y televisivos que adormecen a su audiencia, de tal modo que la discusión de los grandes temas se desvía a controversias triviales ligadas al fútbol o a las telenovelas. Con el control de estos medios estos grupos presentan sus intereses materiales como los de la nación. Circunstancias similares en Bolivia son referidos por Victor Ricaldi (1998).



La demonización de adversarios políticos opera como un medio para desviar la atención de los casos mas notables de corrupción; contribuyen también a la alienación el tipo de entretenimiento, sus contenidos y formas de consumo que muestran y que desvalorizan el medio campesino (García Canclini, 1995). Es notable la manipulación de la inocencia de la gente -con escenas que provocan el llanto- para que la fantasía reemplace a la realidad.

El impacto de los medios masivos, independientemente de su manipulación política, constituye ciertamente una macrovariable relevante; en este sentido debe tenerse en cuenta que la TV penetra la propia intimidad de los hogares campesinos mostransdo

escenas cotidianas de los personajes con buenos niveles de consumo a los que no pueden acceder, desvalorizando la vida rural y destruyendo un modo de vida. El medio en cuestión, con frecuencia, lleva a la gente a la sociedad de consumo presentándoles ciertos productos -cuyo consumo les cambia los hábitos- como indispensables; en esta lógica la seducción reemplaza a la coerción, se juega con la sensibilidad activando afectos ficticios, de modo que se pueda embellecer hasta lo más perverso. La industrialización de la cultura y su organización en modalidades audiovisuales y masivas responde a criterios empresariales de rentabilidad; así si la Bayer o una transnacional de semillas están entre los anunciantes podemos olvidarnos de la agricultura orgánica.

Retornando al comportamiento de la economía debe apuntarse que a la caída de la producción agropecuaria se suma el impacto negativo del proceso de integración en el MERCOSUR sobre la triangulación comercial que generaba ingresos y empleo (Enciso, 1998). Una de las cuestiones que queda clara, por ahora es que el papel del Paraguay en el MERCOSUR parece ser el de proveedor de energía eléctrica aunque para eso deba ser inundado en extensos espacios; otra función parece ser proporcionar mano de obra no calificada y subremunerada al mercado de trabajo de Buenos Aires (domésticas, obreros de la construcción, etc.).



Las formas de explotación de recursos están dañando severamente los ecosistemas y la expansión de las empresas, en vez de fortalecer las colectividades locales las debilitan o hacen desaparecer y afectan a los grupos más vulnerables, que dependen de la explotación de los ecosistemas; las formas destructivas de utilización de recursos naturales es vista, desde una visión prejuiciada

predominante en las esferas del Estado, como “explotación racional de las unidades productivas” que favorecen el desarrollo. Las empresas se basan sólo en la racionalidad costo/beneficio sin considerar el daño ambiental, e ignorando el derecho al desarrollo y el derecho a un ambiente sano consagrados por normas de rango constitucional y por tratados internacionales; lo notable es que el Estado no se considera parte en el asunto. Como veremos, la falta de institucionalidad en el país, que da la impresión que el Estado ya no existe, se torna visible en ámbitos críticos de la vida nacional (Enciso, 1998).

En ese contexto la producción de las modernas empresas, la polarización social y las inequidades crecen paralelamente; se concentran activos y el ingreso. No se trata de un estilo de desarrollo que perpetúa la pobreza sino más bien que la acentúa, debilitando la base de los recursos naturales y humanos.

El uso de tecnologías dañinas y el empobrecimiento de los suelos conducen a una rápida caída de los rendimientos de los cultivos; esto se aprecia a nivel nacional como en los diversos casos analizados.

La diferenciación social, que crece con las inequidades de un estilo excluyente de desarrollo, en algunos casos va asociada a la diferenciación étnica; colectividades diferentes se enfrentan en conflictos basados en competencia por recursos; la dinámica que concentra recursos en algunas colectividades y excluye a otras se origina en acciones discriminatorias alimentadas en prejuicios. Los que concentran recursos son los empresarios integrados en medida importante a enclaves etnoculturales de inmigrantes extranjeros, mientras los inferiorizados en la visión prejuiciada son los campesinos y los indígenas.

En este contexto toda IAP supone intervención en un campo con identidades en conflicto, algunas que parecen condenadas. No se trata de exacerbar las identidades pero tampoco pretender la neutralidad, sino más bien reforzar las culturas despreciadas. En realidad no se trata de una comunicación intercultural -que de hecho no existe en el caso de Jukerisino sino más bien de relaciones hostiles entre actores de múltiples culturas que mantienen una comunicación asimétrica y prejuiciada. De cara a toda IAP se trata de aceptar distintos sistemas simbólicos, diferentes formas de pensamiento y también saberes, que deben ser aprovechados si se quiere incorporar a sus portadores a los esfuerzos para recuperar recursos naturales. Se trata también de negociar, hasta donde sea posible, en situaciones de conflicto por el control de recursos.

El debilitamiento de comunidades nativas y de colectividades criollas va asociada a la degradación ambiental, en tanto las empresas operadas en medida importante por inmigrantes extranjeros utilizan tecnologías dañinas y confinan a campesinos e indígenas en suelos marginales ya degradados. La pobreza creciente y sus correlatos de descomposición social constituyen una consecuencia de una dinámica estructural -cada vez más manejada con control remoto-, en medida importante apoyada por las políticas públicas.

Con el aumento de las tasas de criminalidad la inseguridad y el temor se agregan entre los problemas sociales a resolver, al punto que limita las interacciones sociales y los encuentros, de modo a evitar momentos y lugares peligrosos.

El orden social se resquebraja y debe ser restaurado, así como debe alterarse la imagen pública de un Estado que no cumple su rol de asegurar el orden social y permite la impunidad para los delincuentes (Bergoglio y Carballo, 1993). La descomposición social es resaltada en los cuatro casos analizados (Mora, 1998; Ortiz, 1998); las tasas de crecimiento de la pobreza puede intensificarse en el futuro considerando la variable demográfica que suele ignorarse en los diagnósticos; precisamente el Paraguay tiene una de las tasas de fecundidad más altas en la región. El caso que muestra con más claridad como se deja fuera esta variable es el de la Represa Binacional de Yacyretá, que ya lleva 25 años de atraso y considera fuera de la población afectada a los hogares constiuídos en la zona de impacto directo, luego de un censo realizado hace muchos años, como si la población fuese constante. Ante los procesos de degradación y polarización social

referidos el Estado apenas toma intervención y el sistema de representación a través de los partidos políticos se ha disociado de los intereses sociales; la vigencia de las libertades públicas y la participación política, asociadas al proceso de democratización, coincide con la peor crisis económica y el crecimiento de las inequidades, y ese contexto proporciona el escenario para expresar protestas, frustraciones y descreimiento hacia una democracia irrelevante de cara a las necesidades populares crecientes. Debe subrayarse en este punto, que el sistema de representación monopolizado por los partidos -disociados de la representación sectorial de intereses sociales- es insuficiente; la creciente heterogeneidad y su correlato, la atomización social, bloquean en el sistema vigente la representación política de intereses de los sectores más castigados por la degradación. Quedan como alternativas abiertas la apatía política y pérdida de legitimidad del sistema, el surgimiento de formas neopopulistas, y la rectificación del sistema político vigente.

Las consecuencias más visibles de la dinámica en cuestión incluyen el estancamiento de la economía, el crecimiento del desempleo y la caída del ingreso per cápita, y lo que predomina en el análisis de la situación y en la formulación de soluciones es la confusión, y en las políticas planteadas se sobre enfatizan las medidas para la solución de la crisis financiera, que siendo importante no es la única, teniendo en cuenta que los problemas socioambientales crecientes tampoco pueden esperar.

En estas formulaciones, debe señalarse que en las ideas prevalecientes acerca del desarrollo se sobre enfatiza la dimensión económica y si se considera la dimensión social y la ambiental, se lo hace desde una visión fragmentada como si se tratara de dimensiones separadas de la realidad. En esas ideas, se pone énfasis en la eficiencia y en las funciones del Estado, que debe crear las condiciones adecuadas -básicamente considerando variables macroeconómicas- para que los agentes privados encaren las actividades productivas, y no se profundiza las nuevas funciones del Estado, teniendo en cuenta que el mercado es ineficiente para resolver los problemas de la pobreza y la degradación ambiental.

A la confusión referida han contribuido en medida no despreciable las recetas de los organismos de cooperación al desarrollo, y sobre todo el tipo de intervención que utilizan; la discusión de este punto ciertamente resulta pertinente, dado que con frecuencia la definición de prioridades, y el diseño de los proyectos están básicamente determinados por las agencias internacionales, y puede asumirse que sus recomendaciones de políticas no resultan relevantes de cara a los procesos socioambientales y culturales de las sociedades en vías de desarrollo, por lo menos en el caso del Paraguay.

Los casos analizados en este trabajo sugieren la intervención de agencias de cooperación al desarrollo alimentando un proceso de uniformización con una misma visión del desarrollo para todas las sociedades, aplicando indiscriminadamente los mismos criterios a distintos tipos de actuaciones (construcción de represas, construcción de rutas, planes de protección a comunidades indígenas, etc.); en los emprendimientos en cuestión la dimensión cultural parece ignorada y en el caso de planes de protección a comunidades indígenas sólo se los incluye para cumplir con formalidades.

Se tiene la impresión de que no hay transparencia en las operaciones de algunas de estas

agencias y no queda claro cómo intervienen en ellas la sociedad civil; como ONG, parte de esa sociedad, no sabemos qué proyectos apoyan o están procesando ni qué planes tienen; las operaciones con frecuencia aparecen atadas a una lista de consultores elaborada sin los controles de calidad adecuados. Resulta preocupante también que la cooperación esté ligada a presencia masiva de agentes foráneos, quienes, sin mucho contrapeso, difunden la ideología de la globalización, que afirma la supremacía de un mercado globalizado autoregulado y descalifica posturas de defensa de la identidad nacional.

Parafraseando a Eduardo Galeano puede afirmarse que a veces la cooperación internacional aporta lo suyo para poner la problemática del desarrollo patas para arriba, descansando sobre su cabeza. Esto puede ilustrar el caso reciente de un crédito no reembolsable orientado al desarrollo del Paraguay otorgado por el BID a Partners of de Americas Comité Paraguay-Kansas/CIRD para el fortalecimiento institucional de ONGs paraguayas, sin consulta alguna con las ONGs en las fases de diagnóstico y elaboración del proyecto; el crédito en cuestión pareciera orientarse más a afianzar la presencia norteamericana en el país que al fortalecimiento de la sociedad civil paraguaya, a la que en cierta medida se descalifica. Lo malo no es que los partners se interesen por el desarrollo de competencias de los técnicos de las ONGs sino que capten recursos de la cooperación internacional destinados al Paraguay, en vez de proporcionar ellos esos recursos.

Esta es un historia repetida que no debiera reproducirse en el futuro. En otras formulaciones nos referiremos a errores de bulto en el diagnóstico que identifica como problemas básicos insuficiencias en el gerenciamiento, incluyendo falta de competencias para la formulación de proyectos. Mientras tanto resulta pertinente subrayar que el ejemplo muestra como la opacidad desplaza a la transparencia en algunas versiones de la cooperación internacional.

En el reseñado contexto de crecimiento de la degradación en sus diversas manifestaciones, parece poco sostenible que la misma fórmula enlatada sea aplicada universalmente, sin considerar la realidad socio-cultural de los usuarios; cuando se constata que crecen la pobreza, el desempleo y la desintegración social las fórmulas deben ser revisadas. En esa revisión deben tomarse en consideración por una parte los condicionamientos ligados la globalización del capital, de la producción y de la circulación, y por otra las oportunidades y restricciones derivadas de una nueva revolución tecnológica que globaliza el alcance de los medios masivos de comunicación.

En realidad las prácticas transnacionales se originan en actores o en agencias que no limitan su escenario de actuación a estados nacionales. En tanto en la esfera económica la globalización excluye de las relaciones de producción dominantes a grandes sectores de la población, en lo político más bien se desalienta la participación de las grandes masas excluidas, mientras se promueve la adhesión incondicional al libre mercado a través de adherentes complacientes a nivel de los estados nacionales.

En cuanto a la dimensión ideológico-cultural debe tenerse presente que el capitalismo globalizado quiere llegar a todos -y en gran medida lo logra-. A través de imágenes que

trasmite se ensanchan las necesidades básicas y se reemplaza lo más significativo de la vida por la posesión y consumo de cosas; se persuade a la gente para que se incorpore a un mundo donde todo se compra y todo se vende.

La mentada dimensión ideológico-cultural, así como las esferas económica y política, está organizada a escala mundial, pero se expresa en el plano local, básicamente asumiendo el consumismo como forma dominante. Sus expresiones institucionales, en tanto corporaciones transnacionales, también se hacen sentir a nivel local, que establece precisamente el escenario en el cual los mismos pueden ser resistidos.

Esto hace sentido si se tiene en cuenta que la gente no puede encarar instituciones a las que no tienen acceso o las excluyen, pero si pueden reaccionar ante los excesos de agencias locales que sienten en su vida cotidiana, así como pueden monitorear sus acciones y publicitar sus excesos. Las corporaciones pueden producir daños localmente por la forma de extraer materia prima, por el transporte de esa materia o en el proceso de producción directa, así como afecta a la gente la difusión del consumismo.

En cuanto a la globalización como ideología debe tenerse en cuenta que los actores beneficiados con la mundialización económica y de la tecnología de la información presentan sus intereses como universales; en esa visión la competitividad justifica todo. Es el objetivo tanto de las empresas como del estado y de toda la sociedad. La regulación del mercado es descalificada y se asume que el estado no puede establecer políticas para proteger los mercados, y en los hechos esa ideología propone que se tomen decisiones que solo favorecen a pocos; según esa construcción los actores hegemónicos no pueden ser contradichos. El management empresarial afirma que el estado-nación ya no puede tomar decisiones soberanas.

Yendo a las causas estructurales de la pobreza a nivel nacional, debe tenerse en cuenta que la tierra, que constituye el principal activo en un país caracterizado por el predominio de la producción agropecuaria y por la explotación intensiva de recursos naturales, está muy concentrada. Esta desigualdad refleja una estructura socio-económica muy polarizada y constituye el principal obstáculo para revertir procesos de degradación.

En el recuento de la situación actual, focalizado en los procesos desencadenados por el modelo de desarrollo vigente no puede omitirse el propio sistema político paraguayo que sigue perdiendo legitimidad; el mismo sólo representa algunos intereses sociales y en esa medida carece de representatividad de cara a la diversidad social. Esto está ligado a la debilidad de lo puede llamarse clase dirigente (Enciso, 1998). Un empresario débil y poco ilustrado no tiene posibilidades de plantear un proyecto que devenga hegemónico.

En el punteo rápido en cuestión no puede omitirse el hecho que los procesos ambientales tienen consecuencias sociales mediadas por la caída de la producción agropecuaria; las implicaciones entre estos aspectos de la realidad incluyen a las consecuencias culturales del empobrecimiento y de la atomización social.

Esta puntualización será importante a la hora de discutir el escenario deseable y necesario orientado al desarrollo sostenible y sobre todo al discutir las estrategias adecuadas para

llegar a este escenario.

3. EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES

El tipo de manejo de los recursos naturales que predomina es el depredatorio, independientemente de la escala de producción, con la excepción de aldeas indígenas con mecanismos comunitarios en funcionamiento, que vigilan el cumplimiento de las normas tradicionales referidas al manejo de la naturaleza, aunque incluso en algunas aldeas comienzan a usarse tecnologías dañinas cuando arriendan parte de sus tierras a empresarios.

Existe, sin embargo, una gradación en cuanto a la intensidad del daño causado comenzando por las grandes empresas que operan con equipamiento mecanizado; por el lado de los que sufren el daño la escala comienza con los indígenas que reciben una enorme descarga de agrotóxicos de las empresas cercanas en sus arroyos y en sus suelos.

Las tecnologías adoptadas en el proceso de modernización dañan directamente tanto el medio biofísico como el biológico; la erosión y consiguiente pérdida de fertilidad de los suelos supone uso de fertilizantes que no están al alcance de los campesinos, y dificulta la retención de la gente en el campo. Los agrotóxicos no solo envenenan campos, tierras arables y arroyos, sino que además producen resistencia en las plagas. Las semillas manipuladas genéticamente están reemplazando a las tradicionales producidas por los campesinos, y con ellas se pretenden rendimientos altos pero son cada vez más resistentes a las plagas. Suelos agotados en su fertilidad y arroyos envenenados y colmatados van de la mano con la tristeza y pérdida de atractivos del campo.

En las últimas décadas se dieron grandes cambios en la estructura agraria, que en la década del 70 logró un crecimiento record del 6,7% anual, sin dudas una de las más altas de la región. Las exportaciones agrícolas casi se duplicaron entre 1982 y 1993, y la producción de soja encarada por las empresas modernas se triplica en doce años (1982-1994), mientras la producción del algodón cultivado básicamente por la población campesina cayó en los últimos años con tanta intensidad que si comparamos los años agrícolas 1988-1989 y 1991-1992 constatamos que el área cultivada se redujo a la mitad. Este crecimiento dual que concentra activos e ingresos coincide con las tasas más altas de empobrecimiento en el mundo rural.



La modernización tecnológica y las formas productivas predominantes implican grandes transformaciones con consecuencias dañinas en el manejo de los recursos naturales. Los cambios provocados por la agricultura empresarial intensiva tuvieron consecuencias en la



producción campesina; las prácticas benéficas de explotación de suelos fueron abandonadas con la asimilación de nuevas tecnologías.

El tipo depredatorio de manejo de los recursos naturales que predomina se proyecta en diversas formas de degradación. La deforestación masiva que deja suelos desnudos desata la erosión que en el

caso de la Cordillera de San Rafael llega a doscientas toneladas por hectárea al año; la deforestación indiscriminada es independiente de las escalas de producción aunque responden a lógicas diferentes: los empresarios por la utilización de una tecnología dañina, y los campesinos e indígenas porque a través de la venta de productos forestales pueden obtener dinero rápido. El uso masivo de agrotóxicos, incluyendo herbicidas del tipo 2-4 D que inicialmente fueron utilizados por las empresas, es también adoptado por las explotaciones campesinas, y se generaliza la contaminación de suelos y cursos de agua.

Mientras algunas formas de degradación se dan en todo el país otras son peculiares a ciertas regiones. Así, en el Chaco se mencionan como problemas típicos la pérdida de la biodiversidad, el uso inadecuado del suelo que conlleva erosión eólica y desertificación, y salinización. Esto último está ligada a la deforestación -dada la función de soporte de cumple el monte en relación a las grandes precipitaciones-. Se mencionan así mismo el déficit de agua potable, la expansión descontrolada de la frontera agrícola sin prestar atención a la capacidad de uso de los suelos, un modelo extractivo que supera los límites naturales, y el represamiento de cursos de agua que aumenta las inequidades y acelera la salinización.

En la otra región, la Oriental, el borde este es el que sufre alteraciones más intensas. En efecto, en ese escenario se observan grandes alteraciones del hábitat físico, terrestre y acuático; las alteraciones en cuestión pueden atribuirse a factores que incluyen la tala masiva de bosques, el uso indiscriminado de agrotóxicos, y en general el uso de una tecnología mecanizada y la siembra sin control de pastos invasores que afectan a los asentamientos de población nativa y criolla.

Las prácticas en cuestión provocan además de erosión y sedimentación, alteraciones del caudal, y destrucción de la vegetación ribereña. Como resultado de los procesos

mencionados el recurso suelo está severamente dañado. La erosión hídrica afecta buena parte de los suelos de la región y en las áreas más frágiles se observan avances en la desertificación.

En los últimos veinte años la energía aplicada al suelo para su laboreo y la cantidad de fertilizante utilizado se incrementó por lo menos en un 400%, mientras en los últimos diez años el uso de pesticidas y herbicidas por lo menos se duplicó.

El embalse de Itaipú formado en octubre de 1982 tiene un perímetro de costa de 2.919 km. y una masa de agua de 1.350 km².; erosiones de diferentes tipos se producen en toda esa extensión, facilitadas por las tecnologías predominantes, la desaparición de cobertura boscosa, la intensidad de la precipitación (que llega a una media anual de 1865 mm.), y las pendientes pronunciadas del terreno. Una consecuencia es el volumen considerable de sedimentos contaminados con agrotóxicos que se incorpora al lecho del embalse y la consiguiente degradación de la calidad del agua y de la vida acuática.

La entrada de sedimentos al embalse, a niveles que compromete a largo plazo su aprovechamiento, es señalado por estudios realizados en el marco de la Itaipú Binacional. En el trecho superior del embalse la sedimentación está llenando la sección principal del antiguo valle del Río Paraná con capas de sedimentos del orden de 70 metros de espesor en el canal principal del río. La erosión costera fuerte afecta al 25% del canal principal.

En los estudios realizados en el marco de la Itaipú Binacional sobre contaminación se incorporaron solo productos clorados y no los organofosforados que se acumulan en el ambiente. Tampoco se han hecho estudios acerca del impacto de herbicidas tóxicos utilizados en la región, básicamente el 2-4D que contaminan los suelos y los cursos de agua, y tienen consecuencias graves en la salud de la población, incluyendo alteraciones genéticas. Entre los organoclorados, los de mayor frecuencia de aparición en la región son el Aldrín, Clordano y Eptacloro, que en algunas muestras en los afluentes de la margen derecha dan valores más elevados que los máximos permisibles.

Hasta este punto queda claro que las formas actuales de manejo de los recursos naturales nos están llevando a callejones sin salida, en el sentido que el sistema no es sostenible.

Los avances en materia de legislación protectora del medio ambiente no tuvieron consecuencias prácticas; la aplicación de las normas en cuestión ha sido casi nula, salvo cuando prejuiciadamente fue aplicada contra campesinos. El problema principal radica ahora en los mecanismos de aplicación de esas normas, incluyendo sistemas de monitoreo, inseparables de la participación de las poblaciones locales; la misma debe darse tanto en la formulación de normas de ordenamiento territorial (aptitud de los recursos naturales, uso actual, y cómo deben ser usados), como en su aplicación.

En todos los casos, la situación antes de las intervenciones muestra la deforestación indiscriminada, aunque por razones diferentes: los empresarios, por la utilización de una tecnología dañina y los campesinos e indígenas, porque a través de la venta de productos forestales pueden obtener dinero rápido. En todos los casos estudiados, se observa más que una caída en los rendimientos un proceso de desertificación que resulta del uso

depredatorio de recursos; con la caída de los rendimientos y la emigración de los campesinos se ensanchan las estancias, en los casos de Kaaguazú.

Los pequeños productores contribuyen a la degradación asimilando el modelo de las empresas, en cuanto a desmontes y abuso indiscriminado de herbicidas; en esa asimilación de tecnologías dañinas los campesinos pierden por partida doble, ya que a diferencia de los empresarios no pueden contrarrestar la caída de los rendimientos con el uso de fertilizantes químicos (Mora, 1998). En los nuevos asentamientos la fuente básica de ingresos consiste en la venta de productos forestales, en distintas formas (rollo, poste, metro, carbón), más aún a medida que los productos forestales tienen más valor comercial, mientras cae la productividad de los suelos y hasta el precio real que reciben por sus productos; esa dinámica deforestación-caída de rendimiento-agotamiento de recursos forestales, conduce a nuevos desplazamientos migratorios a nuevos asentamientos en los cuales se reproduce el círculo vicioso (Mora, 1998; Ortíz, 1998). Ese es el resultado de una economía extractiva practicada en ecosistemas frágiles que conduce rápidamente al agotamiento de recursos naturales (Mora, 1998).

La zona de Jukeri refleja bien el estilo de desarrollo predominante que favorece la entrega de los recursos naturales a extranjeros que usan tecnologías dañinas ambientalmente. La entrega de las mejores tierras a los inversores extranjeros no dio resultado, aunque en las concepciones prejuiciadas se los asocia al progreso. Los campesinos sin tierra fueron asentados en lugares frágiles y en la producción de sus parcelas utilizan prácticas productivas inadecuadas, lo que acelera la degradación; en realidad, ante el agotamiento de la expansión de la frontera agrícola a través de la colonización, los campesinos optan por asentarse en lugares frágiles y por el uso depredatorio de recursos naturales, como alternativa a migrar y vivir en las ciudades en las calles.

Esta situación plantea la necesidad de encontrar fórmulas; en estas condiciones: ¿qué pueden hacer los campesinos con tierras pequeñas y suelos agotados, o lo que es aún peor, sin tierra?, ¿Cuáles son los medios alternativos a la venta de madera, postes, leña o carbón, en la estrategia día a día que desarrollan?

El hecho constatado es que el deterioro de los recursos naturales está estrechamente asociado a la pobreza, y que no pueden atacarse aisladamente una de estas caras de la degradación; por el lado de la pobreza debe tenerse en cuenta que la severa o indigencia afecta a hogares que no tienen inserción en las actividades productivas prevaecientes y a lo sumo desarrollan una producción de subsistencia. En estos casos no se trata de promover acciones orientadas al desarrollo autónomo de sectores estructurales, y hace sentido, por lo menos en situaciones extremas, el apoyo limitado al logro de la autosustentación alimentaria.

En los intentos por revertir la degradación los resultados fueron dispares. Entre campesinos asentados en la Cordillera de San Rafael se movilizó a la gente en la agroforestería buscando sembrar especies permanentes y producir materia orgánica, y en la primera fase se observaron resultados positivos, en la medida que la IAP incorporó otros componentes orientados a atacar al mismo tiempo la pobreza extrema, y en esa medida las necesidades inmediatas, y también la atomización social, con asistencia

organizativa. Sin embargo, aún en este caso los suelos ya muy empobrecidos constituyeron una restricción muy fuerte. Se observa una relación inversamente proporcional entre la intensidad de la degradación y los costos de recuperación de los recursos naturales.

La experiencia mencionada muestra que los campesinos pobres son eficientes y pueden contribuir al crecimiento económico en la medida que se les permita el acceso a activos, mediante programas con importante inversión social; sin duda las inversiones en recuperación de recursos naturales, con la cooperación de campesinos pobres tiene un impacto económico importante.

Se observa una relación inversamente proporcional entre la intensidad de la degradación y los costos de recuperación de los recursos naturales.

4. LA PARTICIPACION Y EL MANEJO DE RECURSOS

En cuanto a la participación la misma resulta crucial para el manejo de recursos naturales, tanto para su uso sostenible como para su recuperación y los casos estudiados muestran diversas facetas. Universalmente se reconoce su importancia pero en la realidad no es fácil, sobre todo si pensamos en los sectores actualmente excluidos y en las distintas fases de una intervención (diagnóstico, identificación de soluciones, planificación, gestión o ejecución, y evaluación). Examinando las experiencias sistematizadas, puede afirmarse que resulta axiomático que normalmente la participación es difícil más aún si pensamos en grupos castigados por la degradación -paradójicamente los que pueden revertirla-; en esta medida toda IAP requiere elementos teóricos, metodológicos y técnicos para encararla.

En lo referido a las posibilidades de participación y la incidencia local de macrovariables debe tenerse en cuenta que los cambios en la economía tuvieron consecuencias en la estructura social y en las posibilidades de acción política de los sectores afectados por la degradación; el crecimiento del empleo informal, aunque el mismo mantenga relaciones con el sector formal, aumenta la brecha entre incluidos y excluidos, y modifica el potencial de generalizar y organizar intereses sociales y en esa medida las condiciones de la acción colectiva (Baño, 1993).

En realidad, las dificultades para generalizar y articular intereses afecta también al sector obrero -que siempre tuvo una débil inserción en la estructura económica- y a los estratos medios; esto se aprecia hoy ante la inminente disminución del empleo público y la privatización del sector estatal, tanto en lo relativo a producción de bienes como a la de servicios. La presencia de la empresa privada en la prestación de servicios sociales y el surjimiento de técnicos y profesionales -sin ninguna tradición organizativa- y el creciente cuentapropismo están aumentando la heterogeneidad (Baño, 1993).

En el sector rural una proporción creciente de hogares depende de remesas del exterior de mujeres con empleo doméstico en Buenos Aires, que no tiene capacidad de generalizar intereses; por lo menos la cuarta parte de los hogares rurales, que están pauperizados, no

tienen participación directa en la producción material. Ya indicamos que la marginalidad creciente de las relaciones de producción y de la actividad productiva en general en el campo tiene implicancias para las políticas sociales destinadas a eliminar la indigencia, pero sobre todo tiene consecuencias políticas, dado que los que caen en la categoría lumpen difícilmente pueden agregar y articular intereses; las demandas de este sector referidas a necesidades básicas de subsistencia ligadas a su marginalidad espacial se orientan al Estado.

La similitud de situaciones y necesidades no genera ningún tipo de interdependencia entre ellos y en esa medida dificulta toda organización social; en estas situaciones de desesperanza, la integración comunitaria resulta viable más bien a través de líderes mesiánicos o con carisma capaces de ofrecer atención a sus demandas o de movilizaciones disruptivas, puramente expresivas de protesta. Todo esto dificulta la capacidad de acción colectiva, pero no impide acciones defensivas ante excesos de fuerzas externas, e incluso movilizaciones en torno a satisfacción de necesidades concretas.

El hecho que se reconozca la importancia de la intervención de la gente en los asuntos que la afectan no implica que se la tome en serio; aunque se utilicen los manuales de investigación participativa, pareciera que para cumplir formalidades, en los hechos se desvirtúan sus propósitos en su aplicación. En este punto viene a cuento la participación planteada por el proyecto de desarrollo regional Administración de Recursos Naturales. En la fase inicial de lanzamiento de este emprendimiento se buscó dar concreción a la participación de productores, pero básicamente a los asociados a grandes cooperativas con predominio de inmigrantes extranjeros que operaban en empresas familiares del tipo farmer, que en realidad ya eran hiper participativos y estaban insertos en enclaves etno-culturales prósperos y ciertamente participaban sin contratiempos en las políticas de desarrollo.

En una de las intervenciones consideradas en el estudio ya existió una experiencia organizativa previa, la que facilitó la constitución de comités de pequeños productores (Mora, 1998). Aún en ese caso, sin embargo, no se logró articular la participación a niveles más amplios que el vecindario; la atomización no es una derivación unívoca de la pobreza de los campesinos, ya que los factores que condicionan la exclusión son de naturaleza social, pero también política y económica; romper con esa exclusión no parece fácil en circunstancias en que el Estado no representa todos los intereses sociales. En el caso de la mujer las restricciones para la participación son mayores, ya que a los condicionamientos de clase se suman los de género (Ortiz, 1998).

En este punto, resulta pertinente recordar que la participación que se promueve es necesariamente la organizada, y en las organizaciones difícilmente pueden consolidarse en tanto la economía campesina misma está debilitándose en forma permanente; fijando la atención en las relaciones sociales, que se vuelven cada vez menos numerosas y menos densas, también aparecen condicionamientos negativos. Experiencias organizativas tropiezan con el problema del endeudamiento con las instancias crediticias; se trata de créditos adquiridos para la siembra del algodón, único cultivo que tiene mercado que

cubre todo el país. En este caso, parte del endeudamiento se origina en la compra de productos manufacturados, exacerbados con la inserción muy rápida en la sociedad de consumo. En algunos comités se nota desgranamiento de los socios, ya sea por migración o porque la organización no atiende a sus necesidades específicas

La participación de los indígenas en las IAP, pero también el de los campesinos, tropieza con problemas de comunicación intercultural. En el caso de los campesinos, los técnicos no siempre reconocen a los indigentes y se comunican con los mejor posicionados en la estructura social local. Los indígenas, que con frecuencia viven en condiciones degradantes, no resultan muy atractivos para los técnicos, que prefieren interacciones cortas y permanencias breves en las comunidades indígenas, que dificultan la incorporación efectiva de los indígenas en las IAP.

En relación a esta dimensión de la acción socioambiental interesa destacar la baja autoestima que lleva a los campesinos a la desesperanza en relación a lo que ellos entre pares pueden lograr; les resulta difícil a los campesinos tener confianza en otro de su misma condición social (Ortiz, 1998).

Las restricciones apuntadas sin embargo no son insuperables y resulta notable que en ese mundo que se presenta atomizado a los ojos del observador externo tiene en realidad redes invisibles de solidaridad y autoayuda. De hecho en las comunidades observadas existen hogares que dependen de subsidios de los propios vecinos pobres, que a su modo, sin estatutos ni líderes formales, se organizan para proporcionar la asistencia requerida a los más vulnerables. La acción socioambiental orientado al desarrollo local sostenible requiere sin embargo descubrir esas redes, fortalecerlas y darles un mayor alcance. Esto es inseparable de teorías, métodos y tecnología social, salvo que en un pensamiento mágico se asuma que luego de cursillos resultarán organizaciones sólidas.

De los casos analizados se deriva que, si bien es cierto la escala local es el punto de partida de la participación, la misma necesita articularse hacia arriba pasando por la compañía o localidad -junta vecinal- y el distrito, que es el nivel del gobierno municipal; en Alto Verá los comités se van integrando al gobierno municipal aunque la participación en esta escala se da todavía a un nivel incipiente, en el marco del Consejo Distrital del desarrollo.

Esta participación se da a través de Juntas Vecinales, y el mismo municipio, tal como se refiere en uno de los estudiados, está incorporado a un consorcio de municipalidades de Itapúa, que a su vez integra con organizaciones de base una coordinadora de afectados por la represa de Yacyretá; se trata ciertamente de un caso de articulación hacia arriba de la participación organizada y de intervención en la formulación de estrategias de desarrollo, aunque en respuesta a los excesos del proceso de globalización.

El fortalecimiento del municipalismo necesario para pensar en serio en el desarrollo local sostenible constiuye una nueva institucionalidad con capacidad de gestión y de planificación estratégica, que asume nuevas funciones según rumbos vaya tomando la cuestión social y ambiental; la institucionalidad en cuestión supone concertación y una nueva articulación de lo público y lo privado, del estado y de la sociedad civil, incluyendo

ONGs y organizaciones de base.

El estudio de casos muestra que la participación en el gobierno municipal y la participación local no son alternativas sino complementarios, y que el municipalismo como escuela de ciudadanía que permita la intervención en estrategias que revertan la degradación socioambiental es inseparable de la participación a escala micro.

5. LA CONCIENCIA SOCIOAMBIENTAL

Este es un nivel al cual no puede escapar ninguna intervención socioambiental que en realidad se orienta a lograr cuanto menos su maduración, en términos de conocer los procesos de degradación y sus causas, identificar las formas para revertirlas, e incluso el compromiso con la acción para involucrarse en los procesos para encarar la degradación.

Entre los campesinos pobres se observa un marcado contraste entre el interés demostrado en la recuperación de los recursos naturales y la permanencia de prácticas depredatorias; en este punto, la ambivalencia e incongruencias están asociadas a la necesidad urgente de obtener ingresos en una estrategia que se desarrolla día a día y que incorpora nuevas necesidades generadas con su inserción en la sociedad de consumo; en realidad, es imposible pensar en una conciencia socioambiental madura en situación de degradación social.

En el proceso de maduración de la conciencia ambiental lo primero es resolver el problema del estómago, ya que la primera y central preocupación de los indigentes es cómo alimentar a sus hijos. De ahí que para actuar sobre la conciencia lo primero es atender necesidades concretas ligadas a la sobrevivencia.

El caso de los Mbyá Guaraní muestra que de hecho diversas formas de conciencia socioambiental coexisten; a los indígenas no les resulta una tarea fácil incorporar el conocimiento de la ecopolítica ligada a procesos de globalización que parecen invencibles, y aún más difícil resulta, en una orientación fatalista arraigada, lograr la convicción que pueden ser enfrentadas las poderosas fuerzas que causan la destrucción.

La IAP en Jukerí muestra también claramente que la conciencia está ligada a una identidad cultural, y que sin ella no se puede resistir a procesos de descomposición. Aunque exista en el caso de los Mbyá Guaraní un conocimiento profundo de la naturaleza y las leyes de su funcionamiento, y las forma de uso sostenible de la misma, esa conciencia, sin embargo no basta, ya que fuerzas poderosas que vienen de afuera no se compadecen con la misma. Debe resaltarse también que se observan en Jukerí cambios en la identidad étnica asociados a nuevas pautas de conducta que están ligadas a su inserción en la sociedad de consumo, que afecta sobre todo a los jóvenes y que parece irreversible, y que debe incorporarse a futuras IAP, ya que de otro modo se debilitarán aún más los mecanismos comunitarios indispensables.

La conciencia en cuestión no constituye una esfera separada de las relaciones sociales y particularmente de las comunitarias indispensables para el manejo sustentable de

recursos. Se trata de construcciones que asumen las relaciones sociales a nivel de las prácticas significantes; las formas que asumen a nivel de representaciones las relaciones con otros y con la naturaleza suele estar relacionada con cosmovisiones que incluyen lo ambiental; los conocimientos y prácticas tradicionales pueden permanecer en la conciencia de grupos despreciados que asumen superficialmente normas y comportamientos impuestos. En este sentido se ha observado la coexistencia de diversas configuraciones en la conciencia socioambiental de portadores de la cultura criolla o mestiza.

Esta conciencia es un componente importante de la cultura y particularmente de la definición de lo bueno y de lo malo, de los derechos y obligaciones compartidos que dan sustento a las relaciones sociales. En caso de insuficiencias en esa conciencia socioambiental es poco lo que puede lograrse en materia de recuperación o uso sostenible de recursos naturales. De ahí, que desde el mismo punto de partida debe enfatizarse la maduración de esa conciencia socioambiental inseparable de un sentido de identidad social y cultural, que facilite relaciones sociales numerosas y densas a nivel comunitario, y que con frecuencia deberá ser reconstituida, de modo a permitir inevitables procesos adaptativos en un mundo caracterizado por la rapidez de los cambios.

6. DESARROLLO DE CAPACIDADES

Los contenidos de las experiencias educativas respondieron a las necesidades de los proyectos encarados en las respectivas intervenciones y no se desarrollaron en abstracto sino acompañando procesos de intervención local; las mismas tenían, sin embargo, tuvieron objetivos transversales a todos los proyectos, tales como participación, manejo sostenible de recursos, y desarrollo local. En este punto debe tenerse presente que el uso sostenible, y más aún la recuperación de recursos naturales degradados, es inseparable de la participación organizada de las poblaciones locales. Esa participación supone la constitución de organizaciones que no existían en la experiencia campesina, marcada por su atomización social. Se trata también de desarrollar competencias en materia de comercialización, cálculo de costo/beneficio de sus operaciones posibles, en materia legal, y sobre todo en materia de producción sostenible.

La experiencia de Caaguazú es rica en cuanto a diversificación y las necesidades de desarrollar competencias; en ese sentido la inserción campesina en los mercados vía algodón se tornaba insostenible. Este cultivo rompió con la estrategia campesina tradicional llevando a los pequeños productores a depender de productos manufacturados, pero no la reemplazó ya que generó endeudamientos insostenibles; en ese contexto, los campesinos aceptaron sin dificultades la necesidad de diversificar la producción, pero la transferencia de capacidades para la comercialización no resultó fácil porque de hecho se trataba de crear mercados para un sector económico muy vulnerable (Ortiz, 1998). Como en otras dimensiones de la IAP se trataba simultáneamente de capacitar a los capacitadores.

La constitución y operación de pequeños establecimientos agro-industriales supone transferencias de capacidades que nos lleva de regreso a la comunicación intercultural, e

incluso a los problemas de falta de niveles mínimos de lecto-escritura y aritmética básica en parte importante de la población. Todo esto plantea como un aprendizaje básico la necesidad de desarrollar recursos humanos calificados que puedan apoyar ese proceso de transferencia de capacidades en las acciones de desarrollo, a partir de métodos didácticos innovadores. La transferencia de capacidades de alguna forma deberá asociarse a experiencias de alfabetización, teniendo en cuenta que los analfabetos funcionales representan más de las dos terceras partes de las poblaciones rurales.

En el caso de los indígenas se trataba además de lograr la asimilación selectiva de nuevos conocimientos que les permitiera defenderse de las fuerzas externas que estaban dañando el tekoha. En ambos casos aparecieron insuficiencias ligadas, por lo menos parcialmente a los grupos técnicos del staff y al escaso nivel de alfabetización de los campesinos; los Mbyá, en cambio, rechazan sistemáticamente la escuela por considerarla un medio de destrucción de la identidad. En cualesquiera de los casos el desarrollo de capacidades tiene en este aspecto una restricción que debe ser atacada con métodos adecuados que deben ser desarrollados en futuras intervenciones locales, en las cuales la transferencia de capacidades debe estar ligada a experiencias de alfabetización.

Las IAP muestran logros en la construcción de capacidades en materia técnico-productiva, pero el déficit fue notable en lo relativo a competencias organizativas; esto último se dificulta aún más cuando los objetivos de las organizaciones no responden a las necesidades inmediatas de todos los asociados; igualmente las IAP muestran que al transferir capacidades fácilmente se puede acentuar la diferenciación social, favoreciendo a los mejor posicionados.

El desarrollo de competencias para la recuperación de los recursos naturales y para el uso sostenible de los mismos, supone combinar saberes y prácticas tradicionales con conocimiento científicos, tanto de ciencias sociales como de biología aplicada; se trata no sólo de conocimiento interdisciplinario sino además de su combinación con conocimientos generados y acumulados por horticultores nativos durante siglos. Esta combinación no resulta fácil en los casos estudiados, más aún teniendo en cuenta que debía plantearse simultáneamente la reconversión reproductiva y tecnológica. Futuras intervenciones contribuirán esta cuestión. Las nociones de agroecología adecuada tanto a la recuperación de recursos naturales como a su uso sostenible se asoció en lo posible al municipalismo como medio para el manejo ambiental adecuado y como espacio para el ejercicio de la ciudadanía.

Como se indicó la transferencia de capacidades se dio a dos niveles que se complementan: al de los grupos locales y al de los técnicos-investigadores (capacitación de capacitadores). Esta formación de capacidades se dio a través del programa de docencia que desarrolla una maestría en gestión del desarrollo sostenible en la capital, y comprendió teorías del desarrollo sostenible con énfasis en el desarrollo local; solo una parte de los integrantes de los equipos de intervención recibieron esa capacitación y la mayoría de los mismos fueron demandados para desempeñar otras funciones a nivel de formulación y ejecución de políticas de desarrollo a nivel nacional; así las cosas siguen casi como al comienzo: los técnicos-investigadores en funciones están en el campo y solo

le dedican dos jornadas al mes a la autoformación.

7. TRANSFERENCIAS DE CAPACIDADES

En cuanto a los contenidos y competencias que deben ser transferidos los miembros del equipo de intervención necesitan cierta solvencia en un conocimiento interdisciplinario que les permita abordar la cuestión socioambiental. Ese conocimiento debe combinarse o compatibilizarse con saberes y prácticas tradicionales, o simplemente con el conocimiento de la gente común; en esa medida el capacitador debe estar preparado para un aprendizaje recíproco.

En lo relativo a la metodología de la transferencia de capacidades debe tenerse en cuenta por una parte que muchas técnicas grupales no funcionan con grupos en los que predominan los analfabetos, y por otra que la misma lleva directamente a las insuficiencias de la comunicación intercultural y a la investigación multicultural. La primera, en la medida que los técnicos del equipo de intervención, quienes son portadores de una cultura



normalmente prejuiciada, deben insertarse efectivamente en procesos espontáneos de comunicación con portadores que manejan sistemas simbólicos, visiones y experiencias vitales diferentes, y procesos de comunicación y de consensuar decisiones peculiares. Los prejuicios en cuestión suelen llevar a acciones discriminatorias que perjudican a grupos más vulnerables, tanto a los afectados por situaciones de pobreza crítica como a las mujeres.

Los casos estudiados sugieren que como punto de partida de la transferencia de capacidades debe plantearse el desarrollo de competencias en los propios capacitadores teniendo en cuenta las lagunas mencionadas, y considerando que los grupos con los cuales se trabaja están enfrentados en conflictos abiertos o encubiertos con colectividades pertenecientes a configuraciones culturales distintas; la capacidad de negociar en situaciones de conflicto es otra necesidad sentida en la capacitación de los capacitadores.

Las referidas insuficiencias de los equipos de IAP en cuanto a comunicación intercultural e investigación multicultural sólo puede superarse comenzando con el desarrollo de capacidades de ellos mismos. Se trata de técnicos capacitadores que deben estar preparados para un trabajo interdisciplinario con portadores de diferentes culturas. En este punto, puede afirmarse como axiomático, que sin esos recursos humanos calificados no se podrá tener avances significativos en las intervenciones socioambientales. Todo esto supone teorías, métodos y técnicas adecuados para reafirmar o reconstituir identidades y a

partir de ello revertir procesos de degradación, tanto en su componente socio-económico como en el ambiental.

La formación de una masa crítica de técnicos e investigadores con las capacidades referidas debe recibir atención prioritaria en el marco de las políticas de desarrollo.

8. LAS VICISITUDES EN LAS DIVERSAS FASES DE LA INTERVENCION

1.. El diagnóstico.

A diferencia del diagnóstico de la planificación convencional, en la IAP esta fase no acaba con la formulación del proyecto de intervención, ya que dado el carácter preliminar de la visión de los problemas locales lograda en pocas semanas los resultados no son suficientes, y necesariamente se profundiza durante las etapas posteriores. No resulta fácil, sin embargo, definir en qué momento redondear el diagnóstico preliminar y cómo confirmarlo o rectificarlo posteriormente. El carácter participativo del diagnóstico está ligado a los fines de la intervención y tiene un alcance instrumental importante, pero supone que todas las voces sean escuchadas y las más postergadas son como invisibles o difícilmente visibilizadas.

En todos los casos el diagnóstico inicial tuvo insuficiencias, y resultó notable la visión fragmentada de los técnicos que tuvieron dificultades para captar la complejidad de las situaciones locales. En este punto queda un camino por avanzar en materia de métodos de diagnóstico rápido que sean además afectivamente útiles; en el caso de los campesinos de la Cordillera de San Rafael, el diagnóstico no llegó al nivel de las parcelas familiares y se pasó por alto el hecho que parte de los hogares involucrados en la IAP carecían de toda parcela o tenían parcelas muy reducidas y extremadamente desgastadas. Entre los indígenas el poco tiempo dedicado al diagnóstico tuvo aún consecuencias más negativas ya que un survey etnográfico siempre lleva tiempo.

Por lo demás, la identificación adecuada de la descomposición cultural que amenaza al grupo local debido a múltiples interferencias externas requería desde luego personal altamente calificado.

2.. La planificación o formulación del proyecto.

En esta fase se tiene en cuenta, tanto los objetivos perseguidos para revertir el árbol de problemas, como las estrategias para lograrlo, y en esa medida, la formulación del proyecto es flexible. En este sentido, las experiencias sistematizadas muestran también que la planificación participativa para revertir procesos de pauperización y de degradación de recursos continúa hasta el final, ya que los planteos iniciales deben ser corregidos a medida que una vez desencadenado el proceso se van identificando los factores condicionantes que no eran perceptibles inicialmente. La activación del grupo con las reacciones que genera torna visible lo que estaba en latencia.

Una primera encrucijada de caminos que enfrentó el equipo de intervención fue el relativo

a la selección de los grupos locales; se trataba de identificar estrategias para revertir procesos de degradación, incluyendo la indigencia, pero precisamente estos grupos están asentados en parcelas muy degradadas cuyo costo de recuperación es muy alto, y los hogares tienen muchas carencias -comenzando con la salud y la alimentación-, que también requieren de asistencia externa muy fuerte. Cómo mostrar impactos a corto plazo trabajando sólo con esos grupos?; una tendencia natural es la de combinar hogares afectados por situaciones de pobreza severa con los que sufren una pobreza moderada. Por otra parte, la organización social local está articulada en campesinos mejor posicionados que son patronos en las relaciones de clientela; si la intervención los ignorara abortaría la experiencia y al incluirlos se corre el riesgo de profundizar las inequidades. La lección muestra que las clientelas pueden integrarse a la intervención, en su punto de partida, pero que en el punto de llegada se trata de eliminar las relaciones de tipo patrón-cliente.

En esta etapa, se proyectaron las insuficiencias del diagnóstico, ya que no se contaba con un inventario adecuado de los recursos, y en el caso de los campesinos, no se tomó en consideración el hecho que existían hogares que no tenían cultivos de mandioca ni forraje alguno para el pastoreo de vacunos, y que en realidad, planear acciones para combatir la indigencia no es tarea fácil. Con un diagnóstico más ajustado hubiera sido más fácil diferenciar lo que los extensionistas llaman dominios de recomendación de modo a identificar propuestas diferenciadas para los campesinos que tuvieran alguna tierra y aquellos que no la tenían en absoluto. En la planificación no se establecieron las gradaciones necesarias entre la recuperación de suelos, el mejoramiento de la producción y el apoyo a la comercialización, lo que por otra parte hubiera demandado mayor tiempo. A esta tarea de planificación se incorporaron con dificultades los pequeños productores que desarrollan estrategias día a día, y que debían pensar en horizontes temporales mayores.

En el caso de las aldeas indígenas fue difícil incorporar en la planificación el desarrollo de estrategias adaptativas, que resultó crucial

Una dificultad en la formulación participativa del proyecto está dada por la colisión entre la definición previa de los objetivos y de las actividades requeridas por la agencias de financiación y las opciones asumidas por los grupos locales; en un caso dijeron que querían instalar una fábrica de forrajes y una fábrica de ladrillos, pero en las previsiones del proyecto previamente aprobados no se incluían esas agroindustrias.

En la planificación de acciones se presentan, con relativa frecuencia, colisiones entre la equidad y la decisión de asignar recursos a grupos específicos. Los grupos más vulnerables deberían ser priorizados, pero con ellos no puede pensarse en agroindustrias ni siquiera en comercializar su producción en un horizonte temporal corto. Las experiencias observadas muestran la necesidad de establecer algún mecanismo de subsidio o de transferencia de recursos de los grupos más prósperos y/o emprendedores a los grupos más vulnerables. En relación al tema de la equidad la pregunta reiterada que se plantea el equipo de intervención es: cómo mostrar impactos positivos a corto plazo trabajando exclusivamente con indigentes?.

3.. La ejecución de las actividades programadas.

En las IAP desarrolladas con los campesinos no se presentaron mayores contratiempos en la parte productiva, aunque quedó muy claro que es imposible pensar en períodos de tiempos menores a dos ciclos anuales. Ya durante la ejecución se cayó en la cuenta que en suelos muy pobres ni las pequeñas superficies con pasturas tienen los nutrientes mínimos para las lecheras; los contratiempos climáticos asociados a la extraordinaria cantidad de lluvia afectó mucho más a los hogares indigentes, lo que indica que la vulnerabilidad social va asociada a la vulnerabilidad ambiental, teniendo en cuenta que además los campesinos están asentados en los suelos más frágiles.

Entre las características de los grupos con los cuales se trabaja resalta el hecho que están al margen de las relaciones de producción dominantes, lo que implica que sus demandas se dirigen básicamente al Estado, reclamando asistencia para satisfacer necesidades perentorias; en la medida indicada los grupos en cuestión tienden a orientaciones paternalistas, que se proyectan en la dependencia de los técnicos externos para la ejecución de las actividades previstas. Los campesinos piensan que cuando los técnicos dejan de aparecer por la localidad las tareas proyectadas deberían suspenderse; la cuestión se complica en el caso de plantines germinados y repicados, que en cierta época deben ser sembrados en el lugar definitivo. Las experiencias sistematizadas muestran que desde el primer día de la IAP debe encararse el paternalismo tratando de revertirlo.

La dependencia de la agroforestería del ciclo anual es obvio pero suelen darse imprevisiones (flujo de caja, disponibilidad de semillas y de mudas, disponibilidad de vehículos, etc.) que retrasan las tareas y condicionan negativamente los resultados, tal el caso de especies forestales trasplantadas en lugar definitivo fuera de la época recomendada.

4.. La evaluación.

La evaluación en la IAP tiene sus peculiaridades. En cierta medida es ex post facto pero también es una evaluación recurrente que acompaña al proceso. La evaluación es ex post facto en tanto al final del periodo de tiempo establecido se necesita destilar lecciones aprendidas para validarlas en otras intervenciones, pero de hecho desde los primeros meses se pondera si las soluciones planteadas en las hipótesis iniciales funcionan en realidad, y en su caso se las replantea introduciendo los ajustes adecuados; en este sentido la evaluación es recurrente y se lleva a cabo durante la ejecución del proyecto y se discuten sus resultados en reuniones mensuales. Estos ajustes durante la ejecución del proyecto son inevitables, tanto porque las realidades locales tienen su dinamismo propio, y sobre todo porque la IAP busca provocar cambios que pueden tener consecuencias no deseadas, o simplemente no previstas inicialmente.

Desde la partida quedó claro que se trataba de aprender tanto de los aciertos como de los errores, pero se notaron dificultades que enfrentaron los técnicos para reflexionar sobre sus errores. En la evaluación del impacto se encontró que la operación del fondo lechero tenía un efecto favorable inmediato en los hogares indigentes, pero se notó asimismo que los que más necesidad tienen de acceder a leche vacuna son los que tienen menos tierra y

menos forraje; se vio en estos casos que la indigencia está protegida por una especie de caparazón muy difícil de ser destruida.

Entre los indígenas, en la evaluación el Cacique menciona el desmembramiento del tekoha con el desgranamiento de una aldea, resentida por la falta de una defensa legal eficaz de los territorios del tekoha. En este caso, se notó que las aldeas son las que mejor protegen la biodiversidad aunque curiosamente ganan fuerza en la zona prejuicios de que “los indios no explotan la tierra por haraganes”. En la evaluación inevitablemente se incorporó la invasión de los campesinos sin tierra del territorio indígena y la confirmación, del criterio bastante arraigado que tierra en poder de los campesinos significa degradación, sin tener en cuenta que no tienen abierta otra opción.

Queda claro que un mayor compromiso con el desarrollo local sostenible es inseparable de nuevas formas de gestión y participación, que se articule hacia arriba hasta el nivel del gobierno municipal, por lo menos, enriqueciendo la democracia representativa con elementos de la democracia directa con la gestión participativa.

9. ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS

Diversos son los elementos de una estrategia de desarrollo local sustentable que fueron identificados en los casos considerados de IAP. El punto de partida es un grupo estructurado sobre base territorial, un comité vecinal donde se pueden ver resultados tangibles, impactos rápidos para que el grupo de intervención gane cierta credibilidad, en tanto la gente quede convencida que no se trata de una estafa más; ese éxito inicial puede ser el punto de partida de la recuperación de la autoconfianza de los campesinos que los lleve a la convicción que los esfuerzos desde la base hacen sentido. Estamos aludiendo a un proceso que puede ser largo, que revierta la orientación fatalista basada en experiencia histórica de fracasos, y lleve a la gente a recuperar la esperanza. Ya en la fase del diagnóstico preliminar deben ser detectadas organizaciones preexistentes y/o redes invisibles de solidaridad, que de existir deben ser potenciadas, en vez de crear nuevas organizaciones.

En el punto de partida la planificación estratégica busca desencadenar una dinámica a partir de un impacto positivo en la satisfacción de una carencia básica. En esta perspectiva el tema ambiental entra como parte de una dinámica más general que tienen como punto de partida la satisfacción de una necesidad inmediata. En este sentido debe tenerse presente que del aprendizaje en cuestión resulta que las colectividades locales no son entidades homogéneas, pero definen el escenario que constituye el punto de partida de toda IAP. En esos microespacios los grupos locales se asocian para recuperar recursos naturales degradados y revertir la indigencia; los grupos en cuestión demostraron ser eficientes para la reducción de las desigualdades y la eliminación de la indigencia -que deben constituirse en objetivos básicos- transformando trabajo en capital, al recuperar recursos naturales a través de organizaciones; en ese sentido los comités de Tarumá han creado capital.

Asimismo, las IAPs muestran que los grupos locales pobres con los cuales se trabaja

dependen de la agricultura, y que para ellos la seguridad alimentaria es un componente que pesa tanto para su bienestar como en su autoestima. Para estos grupos es importante el diseño de agroindustrias en pequeña escala, con tecnologías adecuadas, que usan intensivamente fuerza de trabajo, ya que con eso se puede encarar el subempleo y retener a la población joven. Se trata de encarar simultáneamente la reconversión productiva y tecnológica, de modo a maximizar el uso de la fuerza de trabajo disponible a partir de pequeñas superficies de terreno degradadas, que deben ser recuperadas.

Ya desde la primera fase de la intervención, en la visión estratégica debe enfatizarse la dimensión cultural del desarrollo; en este sentido y en cuanto a identidades, debe señalarse que se han observado restos de dignidad y autonomía de cara a poderosas fuerzas externas. Las poblaciones locales resisten, a su modo, las pretensiones de dominación de aquellas fuerzas.

La cuestión cultural que con frecuencia es ignorado plantea la necesidad de discutir algunos aspectos. En esta discusión debemos reconocer que si queremos meter la visión de la gente en las acciones de desarrollo, aunque sólo sea con un alcance instrumental, para lograr que se cumplan las metas fijadas, estamos inevitablemente incorporando a la discusión la dimensión cultural del desarrollo.

En este sentido debe asumirse, entre las proposiciones que no se ponen en duda, que para el uso productivo de recursos locales las estrategias deben echar mano necesariamente a la naturaleza, a la gente y a sus conocimientos, tomando en consideración y teniendo en cuenta que muchos elementos de la cultura criolla y de las nativas -recuperando prácticas que fueron sostenibles- pueden sustentar el imaginario ligado a procesos para revertir la degradación; el diálogo con la gente puede ligar las estrategias de desarrollo local a las condiciones y recursos del medio.

El aprendizaje muestra que en la medida que las soluciones involucren a la gente las estrategias deben orientarse al fortalecimiento de la identidad cultural, recuperando los elementos básicos de la cultura criolla que está en la base de una definición común de la situación nacional y la identificación de metas nacionales compartidas, pero reconociendo la diversidad cultural, y que algunas configuraciones están siendo seriamente afectadas por otras. En ese planteo deben encararse los estereotipos y prejuicios que inferiorizan algunas colectividades y conducen a acciones discriminatorias y a identidades negativas.

Debe asumirse como axiomático que sin mecanismos comunitarios no hay solución posible y que la capacidad de acción es inseparable de la confianza de las colectividades en sí mismas y en la afirmación de su propia identidad. La identidad cultural, por una parte contrarresta riesgos de desintegración-atomización que imposibilitan la acción colectiva, pero por otra, define las potencialidades del grupo aprovechables para la acción socio cultural, en tanto la cultura propia es la que define las formas de enfrentar situaciones. Las identidades reconstruidas y la auto-confianza correlativa en el caso de colectividades afectadas por procesos de descomposición deben permitir que las mismas reconozcan lo que son como colectividad y estén satisfechas con ello. La negación de las identidades negativas -lo que otros quisieran hacer de ellas- y la superación del complejo de inferioridad debe llevar a los grupos locales a la convicción que su cultura no es

inferior a otras. En este punto es pertinente recordar que queda mucho camino por recorrer para revertir identidades negativas y orientaciones fatalistas heredadas de la experiencia colonial y neocolonial, y aprender cómo liberar las fuerzas creativas de la gente, sobre todo de la afectada por situaciones de indignancia.

En el desarrollo de elementos teóricos, metodológicos y técnicos referidos a esta dimensión cultural puede radicar la mayor contribución de futuros esfuerzos. El aprendizaje demuestra que sin mecanismos organizativos no puede haber manejo sustentable de recursos, y esto supone con frecuencia reconstitución de identidades o superar identidades negativas (autopercepción negativa) y asimilar selectivamente nuevas pautas para enfrentar crecientes conflictos por recursos y negociar las diferencias, mediante el diálogo permanente. La gente sólo puede participar en las acciones de desarrollo con lo que tiene y conoce, y con normas que establecen derechos y obligaciones que sean compartidos por todos; la inserción de campesinos en la sociedad de consumo en un proceso muy rápido y la exposición al bombardeo sistemático de mensajes de la industria cultural que llega a todos los hogares a través de la TV está generando nuevas disrupciones en la vida campesina y requiere también atención, dado que los intentos por encararlo han fracasado.

Los casos de IAP muestran escenarios mas bien pesimistas en cuanto a la fuerza de procesos dañinos. Lo que complica aun más las cosas es que tanto la pobreza social como la degradación ambiental avanzan, y la pobreza extrema no es fácil de rever, pero en todo caso, la producción de alimentos y el acceso a condiciones sanitarias mínimas deberían garantizarse, tomando en consideración que esto no puede dejarse librado al mercado.

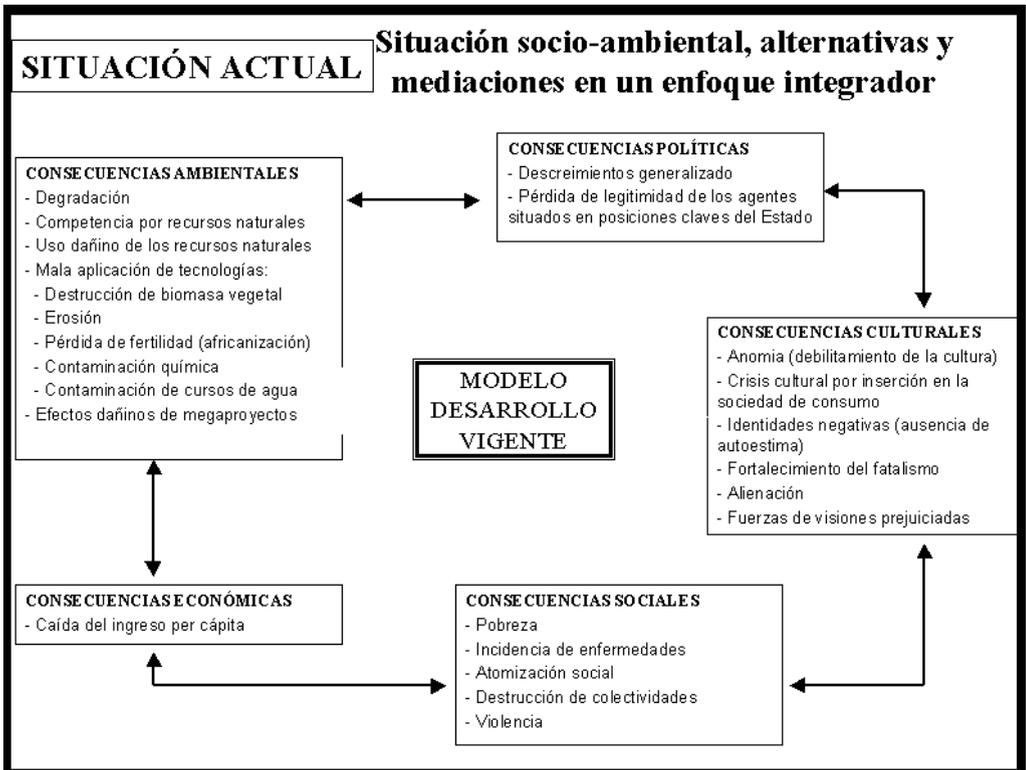
De los casos estudiados resulta claro que toda IAP necesariamente debe orientarse casi simultáneamente a recuperar recursos y a eliminar la indignancia, y en el mejor de los casos al uso sostenible de la biodiversidad. En otros términos, considerando las necesidades inmediatas de las personas, se puede asociarlas a procesos orientados a revertir la degradación; en esta medida, deben ir juntos el combate a la pobreza y a la degradación -inyectando recursos externos como inversión social-, porque en los hechos están asociados, aunque en la planificación estratégica en cuestión la identificación de objetivos y el logro de impactos ambientales significativos deben ser pensados para horizontes temporales que vayan más allá de lo inmediato. Trabajar para cosechar frutos a mediano plazo es no solamente cuestión de madurez organizativa y de conciencia sino de estómago lleno.

En esta etapa debería plantearse ya la construcción desde lo local de una sociedad regional alternativa, en base a un municipalismo más maduro, alimentado por la gestión participativa; el caso de la coordinadora de afectados por la represa Yacyretá muestra que a ese nivel de participación en la gestión del desarrollo solo se llega luego de cierta consolidación de las organizaciones de base.

Los casos estudiados muestran que van de la mano la pobreza y descomposición social por una parte, y la destrucción de ecosistemas por otro, y esto remite a políticas de desarrollo que alteren las macrovariables que condicionan negativamente el desarrollo local. En términos de planificación estratégica esta atención de las organizaciones locales

a las macrovariables se da en el tercer momento, aunque el grupo de intervención puede plantearlo apenas identifique la incidencia de las mismas en el plano local; las circunstancias señaladas sugieren respuestas desde una visión integrada que ataque las diversas formas de degradación; vale decir que no se podrá avanzar en el tema ambiental sin combatir la pobreza. En esta perspectiva deben atacarse simultáneamente la descomposición socio cultural y el deterioro del medio biofísico; si debiera escogerse un punto de partida los casos estudiados indican que en el primer paso debe buscarse remedio a la atomización social-anomia, lo que implica reconstitución de identidades. Se trata de partir en la elaboración del diagnóstico de la visión totalizadora que se esquematiza en el diagrama presentado (figura 4.1).

Figura 4.1.



En las respuestas perfiladas se deben satisfacer necesidades básicas y generar ingresos. En el caso de la población campesina se trata de permitir el acceso a recursos, su uso sostenible, y su recuperación en el caso de suelos ya degradados (redistribución de los derechos sobre la tierra). Debe encontrarse, para los pobres, alternativas de ingreso diferentes a la destrucción de recursos, ya que lo que actualmente tienen a mano para obtener ingresos rápidos es la venta de productos forestales, más aún a medida que aumenta su demanda con la extinción de los bosques. Retener a la población rural

teniendo en cuenta que las oportunidades de ocupación productiva están ligadas a la agricultura campesina es otra meta. La inversión social en reforestación constituye una alternativa que se perfila bien en la experiencia de Tarumá, que muestra que cualquier intento serio en la materia supone inversión social.

En un recuento rápido de las lecciones aprendidas, la visión de los problemas es tan importante como la relativa al escenario deseable y posible, y sobre todo, como la formulación de las estrategias. Los problemas que se discuten no son sencillos porque la degradación crece y no se avizoran salidas. La crisis es multifacética ya que los procesos emergentes son excluyentes y dificultan la sobrevivencia de segmentos grandes de la población, destruyendo la base de recursos naturales y produciendo descomposición social.

Las formas que va tomando el proceso de globalización intensifican la degradación ambiental y las inequidades. De ahí que nuestra IAP deba contribuir a vislumbrar salidas tanto a nivel de políticas públicas como en general de acciones de desarrollo a nivel de ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil, priorizando las organizaciones populares que son las más afectadas por la degradación ambiental y pueden involucrarse en la búsqueda de soluciones. Ciertamente, la fórmula pasa por complementar, en los gobiernos municipales, la representación de intereses a través de los partidos, con la fundada exclusivamente en la base territorial.

Tal como ya se ha indicado, la escala local es el punto de partida de toda intervención, pero la misma está severamente condicionada por macrovariables. En ese sentido resultan pertinentes algunas puntualizaciones:

- ✓ Prestando atención a la situación actual llama la atención el aumento de la pobreza y el decrecimiento económico, así como la degradación de los recursos naturales, que condiciona la recuperación económica teniendo en cuenta que el Paraguay es eminentemente agropecuario.
- ✓ Dado que la situación no es sostenible se requieren ajustes estructurales ligados a la reconversión productiva y tecnológica, y sobre todo a la redefinición de los roles del Estado, que debe garantizar los derechos humanos de tercera generación: el derecho a un ambiente sano, y el derecho al desarrollo; esto supone presencia reguladora y ejecutora en materia de medio ambiente y de mitigación de la pobreza. Este planteo requiere la integración de políticas socio-económicas y ambientales, atacando las causas de la degradación, desde una visión integradora, que incluya la dimensión cultural del desarrollo, que en la realidad es soslayada.
- ✓ En esa revisión debe tomarse en consideración la debilidad institucional del país, ligada a la escasa presencia del Estado en cuestiones críticas como las referidas al empobrecimiento y la degradación ambiental. En la redefinición de funciones del Estado debe tenerse en cuenta que aún en la esfera estrictamente económica existen sectores muy vulnerables que requieren cierta intervención del Estado para posibilitar su inserción adecuada en los mercados, tal el caso de las capas campesinas que tienen

dificultades para diversificar su producción y encontrar mercados para sus nuevos rubros. En todo caso, se trata de atacar las causas estructurales de la pobreza promoviendo la redistribución de activos y del ingreso, y del aumento de la capacidad de toma de decisión por parte de las poblaciones pobres en temas que les afecta.

- ✓ Los cambios planteados requieren de nuevos instrumentos: instituciones financieras alternativas, transferencia de activos para mejorar la productividad y la provisión de infraestructura básica de servicios para que los pequeños productores puedan insertarse en los mercados.

Todo lo planteado supone cambios en las actuaciones, tanto del Estado como de la propia sociedad civil -incluyendo organizaciones de base-, y en general de los organismos internacionales de cooperación al desarrollo. Desde el punto de vista de la IAP no se trata de niveles alternativos, sino más bien complementarios de intervención, que requieren estrategias diferentes.

Se vio también que la IAP requiere nuevos avances en las técnicas necesarias para las etapas básicas de diagnóstico participativo, planificación de acciones, ejecución o gestión y evaluación. El desarrollo de estas técnicas es otra tarea pendiente. Las estrategias en cuestión son inseparables de la formación de recursos humanos con un enfoque interdisciplinario e intercultural, abierto a nuevos sistemas de conocimiento, y con métodos y técnicas que permitan a los trabajadores del desarrollo usar en situaciones de la vida cotidiana tanto los conocimientos locales y sus recursos como los técnico-científicos.

Por lo demás lo aprendido con la investigación acción participativa, que fue reseñado, deberá ser confirmado y enriquecido en futuras intervenciones, y sobre todo deberá alimentar la necesaria revisión de las políticas de desarrollo.
